**JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCION DE CONOCIMIENTO
LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER)**

Núm. Interno **2019-00206** Radicado **54-001-60-01-238-2019-00277**
Los Patios, veintisiete (27) de abril de 2021

Agotado juicio oral y anunciado sentido de fallo condenatorio en contra de BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA por el punible de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA en perjuicio de JENNY CATHERINE CONTRERAS PEREZ sin que se evidencie causal de nulidad, procede el Despacho a proferir la correspondiente sentencia.

SUPUESTOS FÁCTICO

El 05 de marzo de 2019 JENNY CATHERINE CONTRERAS PEREZ presentó denuncia en contra de su compañero permanente BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, debido a que el 01 de marzo de 2019, siendo las 09:00 de la noche cuando ella llegaba de misa a su vivienda ubicada en la AVENIDA 9 CALLE 16 # 102 BARRIO LLANITOS, Gutiérrez Sepúlveda la emprendió contra ella, ofendiéndola con malas palabras, arrebatándole el bolso, de donde sacó una avena y se la tiró al piso, tomó los zapatos de su hija y se los lanzó a ella en la cara, luego la tomó del cabello propinándole golpes en su cabeza, encerrándola en la vivienda sin dejarla salir, manteniéndola allí hasta al día siguiente sin permitirle salir, amenazándola con un cuchillo y con ayuda de unos vecinos pudo salir del inmueble.

IDENTIDAD DEL ACUSADO

BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, nació el 23 de junio de 1996, identificado con C.C. No. 1.093.785.556 expedida en Los Patios, residente en la avenida 8 # k1-42 detrás de la sede del adulto mayor del barrio llanitos de esta urbe, abonado celular 320-4925896, con una estatura 1,77 mts, piel blanca, sin señales particulares visibles.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 24 de mayo de 2019, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías se realizó la audiencia de formulación de imputación en contra del señor Gutiérrez Sepúlveda por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA a la cual NO SE ALLANÓ.

El 13 de agosto de 2019, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del procesado y el 16 de agosto de 2019, este despacho judicial avocó conocimiento y convocó a audiencia de acusación para el día 25 de septiembre de 2019, fecha en la cual el defensor del procesado solicitó suspensión de la misma con el fin de

buscar un acuerdo entre las partes debido al ánimo conciliatorio que existía. El despacho accedió a lo solicitado por la defensa del señor Gutiérrez Sepúlveda y se señaló como nueva fecha para continuación con la audiencia de acusación para el 17 de octubre de 2019.

En la fecha señalada, la fiscalía solicitó aplazamiento de la diligencia, debido a que se había solicitado audiencia de principio de oportunidad, la cual se resolvería al día siguiente (18 de octubre de 2019) en el juzgado homologo. Se accedió a la petición planteada por la fiscalía y se señaló como nueva fecha el día 21 de enero de 2020, para continuar con la audiencia de acusación.

Mediante oficio 7018 de fecha 21 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Penal Municipal de los Patios con función de control de garantías, comunicó que el día 18 de octubre de 2019, se había aprobado PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA MODALIDAD DE SUSPENSIÓN por el término de tres (3) meses.

El 21 de enero de 2020, se instaló audiencia y la representante del ente acusador, no hizo presencia, he indicó verbalmente que había radicado principio de oportunidad en la modalidad renuncia. Debido a la ausencia de la fiscalía, el despacho suspendió la audiencia y señaló como nueva fecha el día 03 de marzo de 2020, la cual no se pudo realizar por ausencia de la representante de la fiscalía. Se reprogramó nuevamente para el día 15 de abril de 2020.

La diligencia programada para el 15 de abril de 2020, no se pudo realizar debido a la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, debido a la emergencia sanitaria ordenada por el gobierno nacional por la pandemia COVID-19.

El 16 de junio de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de los Patios con función de control de garantías, accedió a la solicitud de retiro del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA MODALIDAD DE RENUNCIA, por cuanto el procesado no ha dado cumplimiento a los compromisos acordados.

El 07 de julio de 2020, una vez se ordenó el levantamiento de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, se procedió a señalar fecha para realizar la audiencia de acusación el 30 de julio de 2020.

El 30 de julio de 2020, se realizó la audiencia de acusación, se interrogó a los defensores si tenían conocimiento del escrito de acusación, a lo que indicaron que sí. Se concedió la palabra a la fiscalía, a la defensa y a la abogada que representa los intereses de la víctima, para que manifiesten causales de incompetencia, impedimento, recusación y nulidad si las hubiere e indicaron que no existían y finalmente las partes manifestaron que no existían observaciones al escrito de acusación. La fiscalía procedió a formular la acusación. Una vez fenecida esta

etapa se programó para el 15 de septiembre del mismo año el desarrollo de la audiencia preparatoria.

El 15 de septiembre de 2020, se aplazó la audiencia a petición del defensor del procesado, quien indicó que no contaba aun con los elementos materiales probatorios que le iba a proporcionar su prohijado. Se fijó como nueva fecha el día 05 de octubre de 2020.

El 05 de octubre de 2020, una vez instalada la audiencia se concedió la palabra al abogado de la defensa quien manifestó que las partes estaban arreglando para conciliar, que el primero de octubre había recibido una llamada de la víctima quien le manifestó que estaba bien con el procesado, y quería llevar a cabo un arreglo con el procesado, a lo cual el defensor le indicó que podía pasar un oficio al juzgado manifestando que no quería declarar contra su compañero, si ese era su parecer, si eso era lo que querían. Indicó así mismo el defensor del procesado, que no había recibido los EMP por parte de su prohijado.

En la misma diligencia, la apoderada de victima indicó que su poderdante le había manifestado que el abogado del procesado la estaba presionando, que lo iba a denunciar; continuó su relato arguyendo que el día que menciona el togado de la defensa, el procesado encontró a la víctima en la calle y la presionaba para que ella junto al procesado llamaran al Dr. Angarita, e hiciera esa manifestación. Que la víctima teme por su vida, y esta aterrorizada.

Continuando con la diligencia, se concedió la palabra a la señora Contreras Pérez, quien indicó que lo dicho por su apoderada era verdad, que ella le había dicho que no quería firmar nada, y no quiso firmar ningún documento debido a que el 20 de junio de 2020 el procesado la agredió física y moralmente, y la abusó carnalmente, y por tal motivo ella “no va a echar el proceso atrás, no va a hacer conciliación con el procesado”.

La fiscalía manifestó que la víctima tenía medida de protección policiva, pero no por el juzgado, que iba a solicitar una medida de protección para la víctima y solicitó que se siguiera con el trámite del proceso. Por tal motivo y debido a que el defensor manifestó que no contaba aun con los elementos materiales probatorio se fijó para el día 16 de octubre de 2020 para llevar a cabo la audiencia preparatoria.

Para esta fecha, no se pudo realizar la diligencia programada, debido a incapacidad médica concedida al defensor del procesado, se procedió a señalar como nueva fecha el día 30 de octubre de 2020, la cual no se realizó a solicitud de aplazamiento elevada por la defensa con el propósito de efectuar un preacuerdo. El despacho señaló fecha para la realización de la audiencia para el 20 de noviembre de 2020.

El 20 de noviembre de 2020, se evacua la audiencia preparatoria, se decretan las pruebas y se señaló para el 16 de diciembre de 2020, para inicio al juicio oral.

El 16 de diciembre de 2020, el procesado no asistió a la diligencia, pero al atender la llamada telefónica manifestó que solicitaba se realizara la audiencia de manera presencial, para lo cual el despacho ordenó que se citara al procesado para que se hiciera presente en la sala de audiencias del JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS y se señaló para el 12 de enero de 2021 para inicio de juicio oral, la cual no se pudo realizar debido a que el defensor del procesado manifestó encontrarse con quebrantos en su salud. El despacho accedió a la solicitud telefónica del abogado y señaló como nueva fecha el 08 de febrero de 2021.

El 13 de enero de 2021, la doctora Maria Elena Torrado, apoderada de víctima, remitió solicitud de cambio de fecha en los siguientes términos: *“Como abogada delegada por la Defensoría del pueblo en representación de la SEÑORA YENNY KATERINE CONTRERAS PEREZ. BAJO el radicado 2019-00177 interno 2020-00006, le solicito por la gravedad de la situación de los hechos que siguen aconteciendo contra la vicma por parte del señor Bladimir Andrés Gutierrez, quien a diario la acecha, y ya cursan dos procesos más en su contra, se logre establecer una fecha más próxima para adelantar dicha audiencia de acusación, toda vez que el 8 de febrero es muy larga, ella y nosotros tememos por su vida”.* (Sic)

Mediante auto del 13 de enero de 2021, el despacho accedió a la solicitud elevada por la apoderada de víctima y señaló para el 18 de Enero de año 2021, para audiencia de inicio de juicio oral.

El 18 de enero hogaño se da inicio a la audiencia de juicio oral, la Fiscal presentó la teoría del caso, indicando que demostraría la autoría dolosa más allá de toda duda razonable del procesado del punible de Violencia Intrafamiliar siendo víctima JENNY CATHERINE CONTRERAS PEREZ, solicitó proferir sentencia condenatoria en contra de BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA. El doctor LUIS EDUARDO ANGARITA ESPITIA, defensor público del procesado se abstuvo de presentar teoría del caso.

Se presentaron las estipulaciones probatorias, como lo fueron la plena identificación del procesado y la carencia de antecedentes penales. Se dio inicio a la etapa probatoria de la fiscalía, se escuchó en testimonio a SONIA PATRICIA CARDENAS TRIANA (INVESTIGADORA CTI), EMIDIO ZACCAGNINI SIABATO - MÉDICO FORENSE (Médico Medicina Legal), LUIS ALBERTO PAEZ, PSICOLOGO (Hospital De Los Patios) y a la víctima JENNY KATHERINE CONTRERAS PEREZ. Se da por finalizada la etapa probatoria de la fiscalía.

Debido a que el procesado BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, no asistió a la diligencia, se suspende la misma y se señaló para el 08 de febrero de 2021, para continuar con el juicio oral, y poder evacuar las pruebas de la defensa.

El 08 de febrero del año que avanza, no se pudo realizar la audiencia de continuación de juicio oral, debido a que el procesado no se presentó, su defensor solicita por tal motivo aplazamiento. El despacho accedió a la petición de la defensa y señaló el 19 de febrero de 2021 para continuar con la audiencia.

El 19 de febrero de 2021, se realizó la diligencia, se dio inicio a la etapa probatoria de la defensa, el Despacho ilustró al procesado del contenido de los artículos 383, 385 y 394 del C. P. P. y 442 del C.P.P. modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004. Seguidamente, el despacho procedió a preguntar al procesado si estaba ilustrado sobre si va a rendir testimonio en su juicio, a lo cual el señor Bladimir Gutiérrez Sepúlveda indicó que, si. Así mismo, se le preguntó si renunciaba al derecho de guardar silencio y a no auto incriminarse para rendir el testimonio, contestando que si renunciaba a guardar silencio y a no auto incriminarse. El despacho tomó el juramento de ley al procesado. El defensor público interrogó a su prohijado y la fiscalía realizó el contrainterrogatorio. Se dio por finalizada la etapa probatoria de la defensa.

Finalmente se concedió la palabra a la Fiscalía, apoderada de víctima y abogado del procesado para que presentaran sus alegatos de conclusión. Los dos primeros solicitaron que el sentido del fallo fuera de carácter condenatorio y el defensor del procesado solicitó se declare inocente y por lo tanto, se absuelva a BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, de conformidad al artículo 381 del C.P.P.. adicional a lo anterior, solicitó se declare nulidad de todos los testimonios de la fiscalía, debido a que no se identificaron, ni se les tomó el juramento por la juez que se encontraba en ese momento (doctora SHIRLEY RODRIGUEZ), enfocándose en el punto de credibilidad como elemento primordial.

El 27 de abril de 2021, se emitió el sentido del fallo el cual se indicó que es de carácter condenatorio y se corrió traslado del artículo 447 del C.P.P en la audiencia de individualización de la pena.

CALIFICACIÓN JURIDICA DEL HECHO

Se encuentra tipificado y sancionado en el Código Penal, libro II, título VI, capítulo I artículo 229 del C.P., **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, que indica: “El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad”.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Agotada en debida forma la ritualidad prevista para la etapa del juicio oral, corresponde al despacho poner fin a la instancia con la presente sentencia de acuerdo al sentido del fallo pronunciado al final de la audiencia de juicio oral.

Conforme a la acusación presentada por el delito de violencia intrafamiliar agravada presentada por la Fiscalía 20 CAVIF en contra de BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, y determinada su responsabilidad penal en juicio, lo primero a explicar es la solución dada a la nulidad planteada en el alegato de conclusión del togado de la defensa.

La censura así propuesta lo que quiere avizorar es un vicio en los requisitos de legalidad de la prueba testimonial cuando los testigos de la fiscalía rinden testimonio; pero está claro que, el defensor pasa por alto su actuar en el debate probatorio donde actuó y participó activamente en cada uno de los testimonios, pudiendo verse que contrainterrogó a los mismo, convalidándolos, y revisados los testimonios los contentes y coherentes.

En efecto, todo el discurso realizado por la defensa de Gutiérrez Sepúlveda, se fundó en una simple crítica a la recepción de las pruebas. Se limitó a descalificar la forma, pero de las pruebas recaudadas en nada debatió, desconociendo la lógica, la ciencia o la experiencia.

Para el despacho no pasa de ser un alegato de instancia carente del rigor jurídico, puesto que el alegato gravita en torno a la forma de recepción de los testimonios y no ataca el principio de trascendencia en el cual debía demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso.

De otra parte, del estudio efectuado al plenario no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los intervinientes.

Entonces tenemos que de conformidad con el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, vigente para cuando ocurrieron los hechos (1 de marzo de 2019), es decir, sin la modificación establecida para tal delito en la Ley 1959 de 2019.

Acerca de la agravación punitiva por recaer sobre una mujer, la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Decisión Penal¹ ha señalado que:

“la conducta desplegada por el sujeto activo debe producirse en el marco de una pauta cultural de sometimiento de ella por parte del hombre, lo cual finalmente reivindica su derecho de protección a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación por su género.

¹ Cfr. CSJ SP, 1 oct. 2019. Rad. 52394 y CSJ SP, 19 feb. 2020. Rad. 53037.

Si bien el legislador no estableció un elemento subjetivo especial para la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el inciso 2 del artículo 229 del Código Penal, como si lo hizo respecto del delito de feminicidio, lo cierto es que se trata de una medida más en procura de erradicar la discriminación y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres.

Entonces, la agravación punitiva específica para el delito de violencia intrafamiliar requiere constatar que el agresor realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación de la mujer, sin importar la finalidad por la cual haya procedido.

Entonces corresponde a la Fiscalía acreditar probatoriamente dicho contexto, no solo para establecer la viabilidad de una sanción mayor, sino, además, para verificar si se está en presencia de un caso de violencia de género, pues conlleva la imposición de por lo menos 2 años de prisión adicionales a los establecidos en el tipo básico, además de que visibilizar ese fenómeno es presupuesto de su erradicación y que la mayor sanción se justifica si la conducta del sujeto activo reproduce la pauta cultural cuya abolición se pretende. Ello puede suceder, a manera de ejemplo, si la agresión a la mujer, aunque aislada, ocurrió porque se viste de una determinada manera, porque el hombre decidió ejercer sobre ella una supuesta función de corrección, o porque el agresor la considera un objeto de su propiedad, entre otras circunstancias”

De otra parte se tiene que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por la Ley 248 de 1995, dispuso, entre otros, como deber de los Estados *“incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”*.

Ahora, encuentra el despacho que el artículo 1 de la Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, establece: *“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”*.

El inciso primero del artículo 2 de la Ley 1257 de 2008 dispone: *“DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las*

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”.

En el presente caso tenemos que de lo descrito por la víctima, su compañero permanente BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, el 01 de marzo de 2019, siendo las 09:00 de la noche, la emprendió contra ella, ofendiéndola con malas palabras, arrebatándole el bolso, de donde sacó una avena y se la tiró al piso, tomó los zapatos de su hija y se los lanzó a ella en la cara, luego la tomó del cabello propinándole golpes en su cabeza, encerrándola en la vivienda sin dejarla salir, manteniéndola allí hasta al día siguiente sin permitirle salir, amenazándola con un cuchillo.

Y estas afirmaciones narradas en el escrito de acusación toman fuerza al escuchar los testimonios escuchados en el juicio oral, en primer lugar el **SONIA PATRICIA CARDENAS TRIANA**, Trabajadora social de la Universidad Simón Bolívar, desempeñando cargos previamente en la Fiscalía General De La Nación, quien manifestó que realizó entrevista a la víctima, a quien indagó sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los sucesos y observó que la víctima presentó sentimientos de tristeza, ansiedad como también el expresar soluciones alternativas a su problema. Así mismo, indicó que fue la persona encargada de solicitar los antecedentes judiciales de Bladimir Gutiérrez.

La defensa al hacer uso del conainterrogatorio solo se encargó de verificar la preparación académica de la testigo, a lo cual ella contestó haber cursado el curso básico de policía judicial, el curso de entrevista avanzada, técnicas de entrevista forense para niños, adolescentes víctimas de delitos sexuales, diplomado de violencia contra la mujer y que llevaba en la entidad 13 años.

Continuó la audiencia de juicio oral con el testimonio de **EMILIO ZACADINIPERITO DEL INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS FORENSES**, médico egresado de la Universidad De Barranquilla, indicando que ante requerimiento de la autoridad realizó valoración médico-legal por lesiones personales a la víctima, dando como resultado, la evidencia de las lesiones correspondientes a lo narrado en los hechos, determinando una incapacidad médico-legal por 15 días sin secuelas médico-legales, direccionando a la víctima a valoración por psicología forense para determinación de riesgo de muerte por su pareja.

Manifestó que la víctima señaló que fue agredida por su pareja sentimental con los puños el día 01 de marzo de 2019 en una vivienda ubicada en Los Patios, siendo atendida en un centro médico del cual se aportó historia clínica, cuyo motivo de consulta fue el de haber sido agredida por su pareja sentimental. Ordenando remitir a la víctima a valoración por psicología.

La defensa tuvo la oportunidad de conainterrogar pidiendo al galeno indicara la fecha de la valoración de la víctima, a lo que respondió que fue el 05 de marzo de 2019. Adicional a ello le solicitó el defensor al galeno que le indicara que clase de

lesiones existieron en la valoración y fueron narradas por el médico así: “ en el momento que ingresó la paciente presentaba en la espalda una equimosis de 1x 1.5 cm en la región infra escapular izquierda, en los miembros superiores presentó equimosis múltiples en los dos tercios distales en un área de 4 cms ubicada en la cara externa del antebrazo izquierdo, presentó equimosis de 4x3 cms en el dorso de la mano izquierda en la región metacarpiana, equimosis de 2x1.5 cms en el dorso de la muñeca izquierda, en la pierna izquierda equimosis de 2x10 cms en la cara externa del muslo izquierdo en el tercio medio”

En este momento el defensor interrumpió el testimonio rendido por el médico, y le preguntó si estaba leyendo el informe, a lo cual el galeno respondió afirmativamente debido a que le era imposible recordar las lesiones que presentó la paciente en tal ocasión.

Posterior a ello, la defensa continuó su conainterrogatorio preguntado con que elemento se habían causado tales lesiones a la víctima según tal informe, a lo cual respondió el perito que de acuerdo con lo que refirió la examinada fueron los puños siendo tal un elemento causal contundente.

Continuado con el conainterrogatorio Solicitó que se informara como llegó la presunta víctima a las instalaciones para ser valorada, a lo que respondió que esta llegó con un oficio petitorio de la autoridad solicitante (CAVIF), precisando que ingresó por sus propios medios vestida adecuadamente en aspecto colaborador.

Finalmente el abogado de la defensa solicitó al galeno informar que clase de secuelas se originaron por las lesiones, respondiendo que 15 días de incapacidad sin secuelas médico-legales al momento del examen valorativo, aclaró además que, esto fue a lo que corresponde a su concepto médico Legal.

Posterior a ello, se recepcionó el testimonio de **LUIS ALBERTO PAEZ**, psicólogo egresado de la Universidad Simón Bolívar. Manifestó que atendió a la víctima, y que existió un registro de estas atenciones psicológicas de tal ocasión, junto con una prueba de depresión realizada. Indicó que una vez al paciente se realiza una atención previa de médico general el cual solicita la atención por psicología, el cual aplicara una prueba de valoración de la depresión o ansiedad.

Explicó que la prueba depresión es una escala de 20 enunciados acerca de la depresión y que tal tiene una puntuación de 1 a 4, correspondientes a: 1. muy pocas veces, 2. pocas veces, 3. muchas veces y, 4. casi siempre. En el rango de resultados oscilan entre 0 a 25 puntos, y estos pueden indicar lo siguiente: menor o igual de 25 a 49, entre 50 a 59 puntos pueden indicar episodios depresivos leves, entre 60 a 69 depresión moderada, entre 70 a 100 depresión extrema.

Manifestó que en lo relacionado a la paciente se evidenció como primer resultado un puntaje de 49 siendo este un rango de puntuación sin presencia de psicopatologías, aclarando que se vio afectada emocionalmente.

La defensa como lo hemos visto durante todo el JUICIO ORAL actuó activamente y con el testimonio preguntando: “cuando había realizado el examen a la víctima” y siendo atendida su pregunta por el psicólogo: “el 06 de julio de 2020”. A la siguiente pregunta realizada por el abogado de la defensa: “manifieste que si la victima manifestó haber sido víctima de abuso sexual”, respondiendo afirmativamente; y finalizó el abogado de la defensa preguntado: “Manifieste si existió o no examen médico de ginecología para acreditar abuso sexual por parte del acusado” a lo que respondió el psicólogo: “que era competencia del médico general el competente de dar tales referencias de tal maltrato, aclarando que esto no se reflejó en el test mencionado y practicado a la víctima”.

Por último, el ente acusador llama como testigo a la víctima JENNY CATHERINE CONTRERAS PEREZ indicando al interrogatorio que su hogar estaba conformado por su hija, y sus hermanos y que reside en la avenida 9 K 131-2 llanitos en compañía de su hija S.S., de 3 años. Que conoce al acusado hace 3 años atrás, que mantuvo una relación sentimental, con el señor Bladimir por 2 años y que de su hija era del acusado; que la convivencia con el acusado comenzó a presentar agresiones, malas palabras y que su conducta no fue la adecuada, agrediendo física y verbalmente. Señaló que el 01 marzo de 2019 al llegar a su hogar, éste la atacó y comenzó a golpearla, agrediendo verbalmente para posteriormente encerrarla en el inmueble amenazándola con arma blanca, hasta el otro día que fue cuando logró salir de este; que los lugares donde recibió las agresiones fueron en la espalda, antebrazo izquierdo, hombro izquierdo y rostro.

Indicó que el día de los hechos estaba en compañía de la madre del acusado la señora CARMEN ROSA SEPÚLVEDA y su hija menor de 2 años.

Refirió que en el momento de los hechos escuchó que habían llegado agentes de la policía nacional pero como estaba encerrada en el inmueble, sus vecinos le informaron que agentes del cuadrante habían llegado al lugar de los hechos; agregó que el señor Bladimir no estaba bajo los efectos del alcohol.

Señaló que al marcharse los agentes de policía del lugar de los hechos el acusado la agredió nuevamente verbalmente y en su integridad física.

Manifestó que el día 02 de marzo de 2021 los vecinos del sector escucharon sus gritos de auxilio y estos ayudaron a que escapara del inmueble donde estuvo encerrada; que la frecuencia con que ocurrieron tales agresiones fue alta y que estos sucedían en los fines de semana, que pese a que existió una denuncia previa por los hechos acaecidos el 01 de marzo de 2019, continuaron las agresiones por parte del acusado en varias ocasiones.

Manifestó que existe una medida de protección por parte de la fiscalía y de la policía nacional en calidad de víctima. Manifestó que para la fecha del 01 de marzo de 2019 producto de tales actos de violencia se sintió mal, y presentó un

episodio de depresión y fue valorada por medicina legal producto de las lesiones ocasionadas por el acusado.

Indicó que actualmente se siente deprimida debido a que no tiene como respuesta a tales acciones, puesto que el acusado ha reincidido en diferentes horas del día con ánimo de agredirla; que ha denunciado por agresiones al acusado con fecha del 03 de mayo de 2020 por haberla amenazado con arma blanca, y por abuso sexual.

Indicó que el acusado se ha acercado a donde la víctima labora y que el 20 de junio de 2020 producto de la incapacidad que obtuvo no devengo salario alguno por tal incapacidad y perdió su empleo. Manifestó que todos los actos de violencia se cometieron en presencia de su hija menor.

El apoderado del acusado, haciendo uso del conainterrogatorio, preguntó: “si conocía al acusado” respondiendo que lo conocía desde el año 2016 y describió las características físicas como de estatura alta, delgado, piel blanca, ojos negros.

La defensa continuó con el conainterrogatorio y preguntó: “sobre si al existir una medida de protección sobre ella no la hizo efectiva”, respondiendo la víctima: “que en las agresiones presentadas el señor Bladimir como primer acto ha destruido los celulares que dispone la víctima para evitar que llame a los agentes de policía.

En sesión del 08 de febrero de 2021, se recibió el testimonio del procesado El defensor público le pregunta al procesado sobre si conoce a la señora JENNY CATHERINE CONTRERAS PEREZ, indicando que la conoce porque es la mamá de su hija, y fueron pareja hasta el año 2020.

Pregunta el defensor, “como fue el trato entre ustedes cuando convivieron”, responde el señor Gutiérrez “fue bueno, como toda pareja”, y a la pregunta realizada “usted tiene conocimiento de que usted le ha causado lesiones a JENNY CATHERINE CONTRERAS durante la convivencia” indicó que “no”.

Concluido el interrogatorio por parte de la defensa, la Fiscalía hace uso del conainterrogatorio preguntando al procesado si para el 01 de marzo de 2019 convivía con la victima e indicó que “si”. Mas manifestó que “no recordaba que hubiera ocurrido algún hecho. Siendo falso lo manifestado por la señora Jenny Catherine”.

El defensor hace uso del re-directo, preguntándole la composición de la casa donde residía, si existían puertas. El procesado respondió, que la casa está compuesta por una pieza una sala y una cocina, en el momento en el que convivio con la víctima, vivían en la parte del patio y hay no había puerta de salida hacia la calle. La Fiscalía no hizo uso del conainterrogatorio.

Está claro que de lo expuesto en el plenario y desarrollado en la audiencia de conocimiento la Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del procesado BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA como autor del injusto penal de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA, lo cual se corroboró con los testimonios escuchados en audiencia. Los testimonios recepcionados dan cuenta del hecho ocurrido el 01 de marzo de 2019 y las evidencias de la violencia física sufrida por la señora Contreras Pérez.

La defensa no logró desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía, el testimonio de BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ no brinda ninguna credibilidad al ser valorado en conjunto con los testimonios de la víctima y los médicos, (medicina legal y psicólogo) que atendieron a la víctima, dicho esto, con fundamento en el principio de la carga dinámica de la prueba, esto es que corresponde a cada parte demostrar los supuestos de hecho que pretende hacer valer en el juicio.

La defensa como se expresó al inicio de las consideraciones basó su discurso en una simple crítica a la recepción de las pruebas. Se limitó a descalificar la forma, pero de las pruebas recaudadas en nada debatió, desconociendo la lógica, la ciencia o la experiencia, a tal punto que las avaló cada vez que tuvo la oportunidad de debatirla en lo contrainterrogatorios que realizó.

La materialidad del injusto aparece clara, se ha constatado el maltrato físico y psicológicamente que ha sufrido la señora Jenny Catherine de parte de su agresor, con el señalamiento directo y sin dubitación alguna en contra de quien era para la fecha los hechos su compañero permanente y padre de su menor hija. Este maltrato se dio por su condición de mujer y porque el procesado la considera como un objeto de su propiedad, a su vez recordó el despacho que el día de los hechos se iniciaron para la fecha del 01 de marzo de 2019 a las 9 de la mañana y sólo hasta el día 02 de marzo la víctima logró salir de su residencia con ayuda de unos vecinos toda vez que el procesado la tenía encerrada evitando que esta saliera.

Por lo anterior, tratándose de una persona imputable, pues no existe en el plenario evidencia de lo contrario y no concurriendo a su favor circunstancias excluyentes de la antijuridicidad y de la culpabilidad, puede predicarse más allá de toda duda que BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA es penalmente responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA.

DOSIMETRIA PENAL.

La calificación jurídica de la acusación se enmarcó en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, inciso 2º, en razón a que la víctima es una mujer, sancionado con *pena de prisión de seis (6) a catorce (14) años o lo que es lo mismo de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses.*

Atendiendo los parámetros para dosificar la pena fijados en el art. 60 del C.P. deberá fijarse, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover, estableciéndose como ámbito punitivo de movilidad veinticuatro (24) meses.

Quedando los cuartos así:

Cuarto mínimo	Primer ¼ medio	Segundo ¼ medio	Cuarto máximo
72 – 96	96 – 120	120 – 144	144 – 168

Ahora como en la acusación no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad y concurre la de menor punibilidad, carencia de antecedentes, la pena habrá de dosificarse en el primer cuarto que oscila entre 72 y 96 meses, en consideración a que la lesividad al bien jurídico es la misma conforme al delito, y en razón de la intensidad del dolo y el daño irrogado a la víctima, se impondrá a BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA la pena de setenta y dos (72) meses de prisión.

Como pena accesoria se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual a la pena privativa de la libertad al tenor de lo normado en los artículos 44 y 52 del Código Penal.

DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA

Por expresa prohibición legal no se concederá a BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria al tenor del artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 y el artículo 38 B del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, por cuanto la violencia intrafamiliar se encuentra incluido en el listado del inciso 2º del artículo 68 A del Código Penal, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014.

Por tanto, deberá cumplir la pena de prisión privado de la libertad en el establecimiento carcelario que estipule el INPEC y bajo la coordinación del Juez de ejecución de penas. Librándose orden de captura para el cumplimiento de la pena impuesta, en contra de BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA

DEL INCIDENTE DE REPARACION

Conforme el art. 102 del C.P.P. se cuentan con 30 días a partir de la ejecutoria de la presente providencia para solicitar la apertura del incidente de reparación integral.

RECURSOS

Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cúcuta, el cual debe ser interpuesto en esta audiencia y puede sustentarse oralmente en la misma o por escrito dentro de los cinco días siguientes.

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar penalmente responsable al acusado **BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1.093.785.556 expedida en Los Patios, por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA en perjuicio de JENNY CATHERINE CONTRERAS PEREZ y en consecuencia, se le impone la pena de **setenta y dos (72) meses de prisión**, conforme a lo consignado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: IMPONER a BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA, como pena accesoria la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual a la pena de prisión, a tenor de lo señalado en los artículos 44 y 52 del Código Penal.

TERCERO: No conceder a BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria, por las razones expuestas. Líbrese **orden de captura** para el cumplimiento de la pena en contra de BLADIMIR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA.

CUARTO: La víctima cuenta con 30 días a partir de la ejecutoria de la presente providencia para solicitar la apertura del incidente de reparación integral.

QUINTO: Ejecutoriada esta sentencia, comuníquese a todas las autoridades determinadas en los artículos 166 y 462 del C.P.P y se remítase el cuaderno a los juzgados de penas y medidas de seguridad de Cúcuta (N. de S.), para lo de su competencia.

SEXTO: Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cúcuta, el cual debe ser interpuesto en esta audiencia y puede sustentarse oralmente en la misma o por escrito dentro de los cinco días siguientes

La jueza,

LUISA BEATRIZ TARAZONA GELVEZ

Firmado Por:

**LUISA BEATRIZ TARAZONA GELVEZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS GARANTIAS Y
CONOCIMIENTO**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

8c34399f6b52ab594e2c319283e1a4bbd11280b8ceec52f421303ebf32a3e975

Documento generado en 27/04/2021 04:17:23 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**